



Presidencia del Tesoro de la Nación

4 4 4

BUENOS AIRES, 24 NOV 2003

SEÑOR SUBSECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS:

En las presentes actuaciones se consulta si corresponde acceder a la solicitud de devolución de los derechos de importación abonados por la *Asociación de los Testigos de Jehová* (en adelante *la Asociación*), correspondientes a los despachos de importación N° 12.119-9/94, N° 33.118-7/94, N° 55.781-5/94, N° 116.481-8/94, N° 13.063-3/95, N° 33.094-1/94, N° 24.170-8/97, N° 26.583-2/97, N° 59.384-7/97 y N° 97 073 ICO4 180.346 L (v. fs. 1 vta.).

La elucidación de la cuestión requiere determinar si la exención contemplada en el artículo 3°, apartado 1°, inciso d) de la Ley N° 16.656 (B.O. 31-12-64), resulta de aplicación a los derechos de importación.

- I -
ANTECEDENTES

1.1. Las actuaciones se originan en el reclamo de repetición efectuado por *la Asociación* ante el Administrador Federal de Ingresos Públicos, en el cual solicitó **...la devolución de los importes en conceptos de derechos de importación e I.V.A -descriptos en los despachos detallados en la planilla anexa-** que el Estado Nacional ha percibido indebidamente por una incorrecta interpretación del servicio aduanero (el resaltado figura en el original; v. fs. 5/6).

Según la peticionante, las operaciones que dieron lugar al pago de los referidos gravámenes se encuentran al-



canzadas por el artículo 3º, punto 1, inciso d) de la Ley N° 16.656, que exime del pago ...de todo otro impuesto nacional (a) las entidades civiles sin fines de lucro con personería jurídica dedicadas a la educación, a la asistencia social y a la salud pública,... (v. fs. 5/6, fs. 149/174, fs. 1/7, CUDAP Expte. N° S01:253589/02 MECON).

1.2. A efectos de sustanciar el trámite iniciado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) (v. fs. 5/7), el 29 de noviembre de 2000 la Asociación formalizó su reclamo de repetición ante las autoridades aduaneras en los términos de los artículos 809 y concordantes del Código Aduanero y solicitó la devolución de los importes correspondientes a **los derechos de importación** abonados en ocasión de los despachos que individualizó a fojas 1 vuelta (v. fs. 1/2).

2. Al examinarse en sede aduanera esa solicitud, la División Régimen Tributario y Asuntos Generales del Departamento Asesoramiento de la Dirección Asuntos Legales de la Dirección General de Aduanas observó que el reclamo por restitución de los importes correspondientes a los despachos de importación N° 116.481-8/94, N° 12.119-9/94, N° 33.118-7/94 y N° 55.781-5/94 se encontraban prescriptos.

Señaló en tal sentido que los referidos importes fueron ingresados durante el año 1994, por lo que a la fecha de formalización del reclamo -29 de noviembre de 2000- el plazo de prescripción quinquenal previsto en el artículo 815 del Código Aduanero -que comenzó a correr el 1º de enero de 1995- se había cumplido (v. fs. 111/112).

Respecto de los despachos de importación N° 26.583-2/97, N° 24.170-8/97 y N° 13.063-3/95, trajo a colación el



445



Procuración del Tesoro de la Nación

criterio oportunamente vertido por la Dirección Nacional de Impuestos y por la Dirección de Asuntos Legislativos y Tributarios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del entonces Ministerio de Economía, según el cual, a partir del dictado de las Leyes N° 20.545 (B.O. 22-11-73) y N° 22.415 (B.O. 23-3-81), la exención contemplada por la Ley N° 16.656, de comprender a los derechos de importación, no se encuentra vigente.

Pero, teniendo en cuenta la opinión expresada por la Procuración del Tesoro en *Dictámenes* 240:354, según la cual la Ley de Impuesto a las Ganancias no derogó todas las disposiciones de la Ley N° 11.682 (B.O. 12-1-33) y sus modificatorias, ni eliminó, por ende, las exenciones específicas previstas en el artículo 19, inciso s) de la Ley de Impuesto a los Réditos, estimó procedente elevar las actuaciones al entonces Ministerio de Economía a los efectos de precisar el alcance de esa doctrina, en particular **en lo atinente a la aplicación de las exenciones tributarias de la Ley N° 16.656 a los derechos de importación.**

En lo tocante a los despachos de importación N° 33.094-1/94, N° 59.384-7/97 y N° 180.346-1/97 manifestó que no resultaba posible emitir opinión por no encontrarse agregada la documentación pertinente.

3. Al ser consultada la Dirección Nacional de Impuestos del entonces Ministerio de Economía, se remitió a la opinión vertida por ella en el Memorando de fojas 116/118, la cual -dijo- había sido oportunamente compartida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del aludido ministerio (v. fs. 119).



Según el referido Memorando, la exención contemplada en el artículo 3°, apartado 1°, inciso d), de la Ley N° 16.656 no se encontraba vigente.

Indicó en tal sentido que el artículo 4° de la Ley N° 20.545 derogó a todas aquellas normas generales que autorizaban importaciones sujetas a desgravaciones de derechos de importación o con reducción de derechos; inclusive las contenidas en regímenes promocionales, sectoriales, regionales o especiales de cualquier índole.

Puntualizó además que el artículo 5° de Ley N° 20.545 exceptuó de la derogación diversas situaciones, entre las no se contó el supuesto de autos.

Por otra parte -agregó- a partir de la sanción del Código Aduanero, entró a regir un ordenamiento integral que tuvo por objeto regular todos los institutos que componen la materia aduanera, y sustituyó la legislación preexistente, derogando a través del artículo 1187 toda disposición que se le opusiera.

De acuerdo con ello, desde ese momento corresponde, en lo relativo a exenciones de derechos de importación, remitirse a lo dispuesto en los artículos 664 y 667 del aludido Código.

El citado Memorando concluyó señalando: *En suma, y como corolario de todo lo expuesto, corresponde destacar que la sanción de dos leyes tan importantes como las Nros. 20.545 y 22.415 impide afirmar que la exención que se otorgara a las entidades civiles sin fines de lucro con personería jurídica dedicadas a la educación, a la asistencia social y a la salud pública a través del inciso d) del artículo 3° de la Ley N° 16.656, de comprender la misma a los*



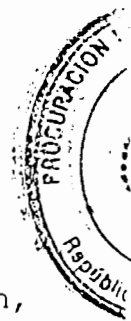
Procuración del Tesoro de la Nación

derechos de importación, se encuentre vigente en lo que a estos tributos se refiere.

4. Ante lo expresado por la Asociación a fojas 121 (vta.)/122 acerca de que el criterio sostenido por la Dirección Nacional de Impuestos no tiene en cuenta la doctrina de la Procuración del Tesoro sentada en *Dictámenes* 240:354, la Dirección de Asuntos Legislativos y Tributarios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de Economía expresó que ...*resulta en forma clara y evidente, que el Subprocurador al momento de expedirse, tuvo en miras analizar la procedencia del beneficio únicamente respecto del Impuesto al Valor Agregado y no como afirma la actora, respecto de todos los otros impuestos nacionales (v. fs. 123/124).*

Agregó que si al estudio de la cuestión planteada en dicha oportunidad se le hubiere otorgado el alcance pretendido por la peticionante y no se hubiera sujetado su análisis a las circunstancias y características del caso en particular, se habría corrido el riesgo de hacer extensivas las conclusiones a una diversidad de situaciones sin la necesaria y debida ponderación de las particularidades de cada una de ellas, obviamente no previsibles.

Destacó finalmente que la Procuración del Tesoro de la Nación se limitó en *Dictámenes* 240:354 a señalar que la exención de todo otro impuesto nacional introducida por el artículo 3° de la Ley N° 16.656 al modificar la entonces Ley de Impuesto a los Réditos subsistió al ser sustituido este tributo; y a evaluar su aplicación al caso del impuesto al valor agregado. Concluyó de ello que la situación ob-



jeto del reclamo, que se refiere a derechos de importación, difiere de la analizada en el mencionado asesoramiento.

5. Vueltas las actuaciones a la Dirección Nacional de Impuestos para que se expidiera sobre la posibilidad de aplicar al caso el criterio de Dictámenes 240:354, expresó: **Tal como surge nítidamente (...) el alto organismo asesor se pronunció con relación a una situación concreta, tal como es la situación tributaria de la Fundación de la Hemofilia frente al impuesto al valor agregado.** Por el contrario, nada dice, de los derechos de importación (v. fs. 127/128).

Por consiguiente, ratificó sus anteriores opiniones de fojas 116/118 y fs. 119, respectivamente, y compartió los términos del dictamen emitido por el servicio jurídico de la jurisdicción.

6. A fojas 133/134 luce copia de la Resolución (RN) N° 210/02 del Jefe de la Región Norte de la Dirección General Impositiva de la AFIP, que resolvió *Hacer lugar a la devolución presentada por la ASOCIACIÓN DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ, CUIT N° 30-62671206-8, proveniente del saldo a favor del impuesto al valor agregado...* (el resaltado me pertenece; v. art. 1° de la resolución).

En ese estado, se solicita mi opinión.

7. Encontrándose ya radicados los actuados ante esta Casa, la Asociación efectuó una nueva presentación y acompañó copia de un escrito que se encontraba ya agregado al expediente (v. Actuación N° 1982/03, agregada sin acumular al Expte. ppal.).



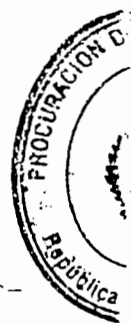
4 4 7

*Procuración del Tesoro de la Nación*

En esa presentación la interesada expresó: El debate jurídico planteado con la Ley 16.656 y su incidencia en las importaciones que realiza la Asociación de los Testigos de Jehová, no se inició con el expediente de la referencia sino con el pedido de devolución de garantías otorgadas a favor de la Dirección General de Aduanas (DGA) al momento de exigírsele el pago del Factor de Convergencia en sus importaciones. En esa oportunidad, la Asociación solicitó a la DGA la exención de dicho pago a través de la actuación **AD-GA-2001-413779** que generó, en la Secretaría (sic) de Industria, Comercio y Minería -autoridad de aplicación del Decreto N° 803/2001- el expediente **EXPMECOND EX 061-010237/2001**, que luego pasó a ser **EXP S01: 0057480/2002**. (el resaltado figura en el original).

En varias oportunidades se planteó al servicio jurídico del Ministerio de Economía y Producción, con relación al expediente del Factor de Convergencia, nuestra opinión acerca de la necesidad de consultar a la Procuración del Tesoro de la Nación, toda vez que considerábamos que en las actuaciones se encontraban reunidos los presupuestos que habilitaban la intervención del organismo.

A pesar de la vinculación existente entre el expediente de la referencia y el relacionado con el Factor de Convergencia, advertimos que el Ministerio de Economía y Producción sólo ha girado a la Procuración del Tesoro de la Nación el expediente **EXP-S01:0232051/2002**, sin considerar que los dictámenes jurídicos que obran en el mismo - partes esenciales de la consulta- fueron emitidos para sustanciar las actuaciones relacionadas con el Factor de Convergencia. En este punto cabe resaltar que la entidad religiosa planteó ante los servicios jurídicos intervinientes la necesi-



dad de determinar, fehacientemente, si el Factor de Convergencia era un impuesto nacional móvil (derecho de importación), una tasa, una contribución, o si se trataba de un régimen de convergencia monetaria **donde no debería influir, al otorgarse excepciones al pago, la exención prevista en la Ley 16.656** (el resaltado figura en el original).

- II -
NORMATIVA

1. El artículo 3° de la Ley N° 16.656 dispuso: **Modifícase la ley 11.682 (texto ordenado en 1960 y sus modificaciones)** en la siguiente forma: 1° Modifícase el art. 19, en la forma que se indica seguidamente: (...) d) Agrégase como nuevo inciso, el siguiente: **Quedan exentas del pago del impuesto a los réditos y de todo otro impuesto nacional las entidades civiles sin fines de lucro con personería jurídica dedicadas a la educación, a la asistencia social y a la salud pública, y los inmuebles de su propiedad utilizados para el desarrollo de sus actividades o para la promoción de recursos destinados al cumplimiento de sus fines** (el resaltado me pertenece) (v. art. 19, inciso s), de la Ley N° 11.682, t.o. por Dec. N° 3225/72, B.O. 4-7-72).

2. Posteriormente, el artículo 105 de la Ley N° 20.628 (B.O. 31-12-73) -que creó el impuesto a las ganancias- estableció: **El tributo que se crea por la presente ley sustituye al impuesto a los réditos...**

Ese plexo legal -a diferencia de la Ley N° 11.682 (modif. por su similar N° 16.656)- sólo contempló exenciones al impuesto que reglaba.



448

Procuración del Tesoro de la Nación

3. La Instrucción General (DGI) N° 28 del 11 de agosto de 1995 previó: Se lleva a conocimiento de las dependencias que de acuerdo con el criterio sustentado por la Secretaría de Ingresos Públicos en el expediente 250.027/95, las disposiciones de la ley del impuesto al valor agregado, por tratarse de normas de carácter genérico, no afectan ni derogan beneficios concedidos a determinados sujetos por leyes especiales, las que de hallarse vigentes prevalecen sobre las previsiones de la ley del impuesto.

A modo de ejemplo cabe citar las leyes: (...) 2) 16656, artículo 3°, inciso d) (BO: 30/12/1964). Exime del impuesto a los réditos y de todo otro gravamen nacional a entidades civiles sin fines de lucro dedicadas a la educación, asistencia social y salud pública.

4. No obstante, posteriormente, sin que mediara cambio legislativo, la precitada instrucción general fue dejada sin efecto por su similar AFIP N° 5 del 3 de julio de 2000.

Este acto reglamentario estableció: Atento a lo dictaminado por las Direcciones de Asesoría Técnica y Asesoría Legal en el sentido de que la ley de impuesto al valor agregado, en tanto contiene disposiciones exentivas específicas, acota las franquicias genéricas contenidas en leyes u otras normas anteriores a su dictado, se lleva a conocimiento de las dependencias que se deja sin efecto la instrucción general (DGI) 28/95, del 11/8/1995.

5.1. En materia de exenciones a los derechos de importación, el Código Aduanero dispone en su artículo 664: 1. En las condiciones previstas en este código y en las leyes



que fueren aplicables, el Poder Ejecutivo podrá: a) gravar con derecho de importación la importación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de importación la importación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar el derecho de importación establecido.

2. Salvo lo que dispusieren leyes especiales, las facultades otorgadas en el apartado 1 únicamente podrán ejercerse con el objeto de cumplir alguna de las siguientes finalidades: a) asegurar un adecuado ingreso para el trabajo nacional o eliminar, disminuir o impedir la desocupación; b) ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior; c) promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las especies animales o vegetales; d) estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno; e) atender las necesidades de las finanzas públicas.

5.2. Por su parte, el artículo 667 del mismo plexo legal establece: 1. El Poder Ejecutivo podrá otorgar exenciones totales o parciales al pago del derecho de importación, ya sean sectoriales o individuales.

2. Salvo lo que dispusieren leyes especiales, las facultades otorgadas en el apartado 1 de este artículo, únicamente podrán ejercerse con el objeto de cumplir alguna de las siguientes finalidades: a) velar por la seguridad pública o la defensa nacional; b) atender las necesidades de la salud pública, de la sanidad animal o vegetal o ejecutar la política alimentaria; c) promover la educación, la cul-



4 4 9

Procuración del Tesoro de la Nación

tura, la ciencia, la técnica y las actividades deportivas; d) facilitar la acción de instituciones religiosas y demás entidades de bien público sin fines de lucro así como satisfacer exigencias de solidaridad humana; e) cortesía internacional; f) facilitar la inmigración y la colonización; g) facilitar la realización de exposiciones, ferias, congresos u otras manifestaciones similares.

6. El Aviso (DE TEIM) 10/03 emitido el 6 de junio de 2003 por la Dirección Técnica de la Dirección General de Aduanas comunicó al servicio aduanero: Visto el Dictámen (sic) DGAJ N° 147208 de fecha 21 de enero de 2003 emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Ingresos Públicos y considerando el Memorando N° 45 de fecha 5 de Mayo de 2003 de la Dirección Nacional de Impuestos recaídos ambos en EMEC S01-0232051/02, que determinan en sus fundamentos que con la publicación en el Boletín Oficial de fecha 20-11-73 de la Ley 20545 han quedado derogados entre otros, los beneficios a la importación que otorgaba la Ley 16.656; SE INSTRUYE que corresponderá por las Aduanas de Registro la formulación de los cargos pertinentes por los Derechos de Importación y demás gravámenes inclusive el Factor de Convergencia cuando, este fuere de aplicación, que hubieren resultado desgravados en las operaciones de importación a consumo interpuestas con invocación de la precitada Ley 16.656.

En cuanto a las destinaciones que se hubieren formalizado por el Sistema Informático María a partir del año 1999, resulta necesario destacar que hasta el 02-06-03 se hallaban incorporadas a la Lista informática denominada



"LEY 16.656 CUIT" para hacer uso del Código de Ventaja - EXLEY16656- las siguientes entidades civiles sin fines de lucro: ASOCIACIÓN DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA CUIT 30-62671206-8, ASOCIACIÓN ISRAELITA ARGENTINA TZEIRE AGUDATH JABAD CUIT 30-63386545-7 y FUNDACIÓN ADORAD CUIT 30-70227930-1.

Remítase vía correo electrónico a la Dirección de Control, a las Subdirecciones Generales de Operaciones Aduaneras de Interior y Metropolitana, para su comunicación a las Aduanas que le dependen, al Centro de Despachantes de Aduanas y Cámara de Importadores y Exportadores de la República Argentina (v. fs. 144).

- III -
EXAMEN JURÍDICO

1.1. Advierto liminarmente que en la presentación formalizada ante esta Casa que luce agregada al expediente principal como Actuación N° 1982/03, parcialmente transcrita en el Acápite I, punto 7. de este asesoramiento, la interesada ha introducido una cuestión que excede el marco de la consulta formulada al pretender que también se examine si las disposiciones de la Ley N° 16.656 resultan de aplicación al denominado *Factor de Convergencia*.

Teniendo en cuenta que el dictamen del Procurador del Tesoro se encuentra reservado en principio, al señor Presidente de la Nación, a los señores ministros, secretarios, subsecretarios, jefes de estado mayor de las Fuerzas Armadas y directores de los servicios jurídicos correspondientes (conf. Dict. 191:80; 195:156; 199:84; 200:209; 204:60 y 206:92), y que, por consiguiente, el Organismo carece de



450

Procuraduría del Tesoro de la Nación

competencia para acceder a pedidos de dictamen efectuados por los particulares, la presente opinión no ingresará al análisis de aspectos tal como el introducido por la presentante en la referida actuación, respecto de los cuales no lucen agregados los antecedentes y que no han sido previamente tratados por el servicio jurídico de la jurisdicción en el supuesto *sub examine*.

1.2. En lo atinente al fondo de la cuestión planteada en estos actuados, recuerdo que, según doctrina constante de esta Casa, el dictamen del Procurador del Tesoro es relativo al caso concreto tenido en consideración; por consiguiente resulta improcedente extender sus conclusiones más allá de las premisas respecto de las que ha recaído (v. Dictámenes 241:515).

2. De conformidad con ello, esta Casa tuvo ocasión de **acotar** el alcance del asesoramiento vertido en Dictámenes 240:354 **al supuesto fáctico y normativo en el que la mencionada opinión fue formulada** (v. Dictámenes 240:399).

3.1. Sin perjuicio de la opinión categórica vertida en el asesoramiento citado en último término, advierto que en el presente caso se consulta si el artículo 3º, apartado 1º, inciso d), de la Ley N° 16.656, de acuerdo con el cual **Quedan exentas del pago del impuesto a los réditos y de todo otro impuesto nacional las entidades civiles sin fines de lucro con personería jurídica dedicadas a la educación, a la asistencia social y a la salud pública,...** (el resaltado me pertenece), **comprende a los derechos de importación.**



3.2. Al respecto **hago notar que, tratándose de los gravámenes a la exportación e importación, la Constitución Nacional no emplea los términos impuestos ni contribuciones**; ello, -explica Luqui-, posiblemente a causa de la función que esos gravámenes cumplen como *medios o instrumentos de que pueda hacer uso el Estado con fines de política económica*.

La aludida finalidad de los derechos de aduana como instrumentos de comercio exterior impide así asimilarlos a los *impuestos*, cuya *causa jurídica* es, ciertamente, la capacidad contributiva (v. Juan Carlos Luqui, *Derecho Constitucional Tributario*, Depalma, Bs.As., 1993, ps. 70 y ss.; v. también, Ley N° 20.545 de *Derogación de Franquicias Aduaneras para Importaciones*; Ley N° 22.415 -*Código Aduanero*-, que como cuerpo legal armónico y sistemático regula lo concerniente a las reglas de base a aplicar en la materia; y Nota dirigida al Poder Ejecutivo acompañando el proyecto de la Ley N° 22.792, ADLA XLIII-B, ps. 1333/1334; B.O. 25-4-83).

3.3. Desde esa perspectiva hermenéutica, estimo que la exención consagrada por el artículo 3°, apartado 1°, inciso d), de la Ley N° 16.656 respecto de *todo otro impuesto nacional* (el resaltado me pertenece), **no alcanza a los derechos de importación cuya repetición se solicita en estos actuados**.

Conviene recordar al respecto que, tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la tarea de hermenéutica, la norma que estatuye beneficios de carácter fiscal ha de ser interpretada *indagando cuidadosamente su finalidad* y si ésta se ha cumplido, pues sólo de tal manera el mayor beneficio esperado a través de la dis-

minución de la recaudación fiscal podrá alcanzar su verdadero cometido (v. Fallos 308: 2555)

3.4. En otro orden destaco que, si bien surge de las actuaciones el carácter de entidad de bien público sin fines de lucro que inviste la Asociación (v. fs. 10/17), **al no constar agregados en los obrados los estatutos de la mencionada entidad no corresponde emitir opinión respecto de si encuadra en los supuestos taxativamente precisados en el artículo 3º, apartado 1º, inciso d), de la Ley N° 16.656 (educación, asistencia social y salud pública).**

Advierto en tal sentido que, tal como lo sostuviera mi predecesor en el cargo en Dictámenes 240:354, **el fundamento fáctico - jurídico de la exención a favor de las fundaciones se sustenta en que las actividades de esas entidades suplantán ...los pagos de transferencia que el Gobierno debe efectuar para solventar un grupo importante de actividades instrumentales propedéuticas al logro del bien común...; fundamento que, a la luz de los estatutos de la Fundación de la Hemofilia, tenidos oportunamente a la vista, resultó en el caso examinado irrefutable para mi antecesor.**

Porque, si como se sostiene desde la doctrina tributaria, el Estado carece de capacidad contributiva (v. Dino Jarach, *El Hecho Imponible*, Abeledo Perrot, Bs.As., 1996, ps. 197 y ss.); o si tal como se expresó en Dictámenes 232:164, **...carece de sentido que el Estado-poder público se grave a sí mismo,...** ya que (...) **no parece jurídicamente posible concebir una relación de Derecho en la que un sujeto contribuya consigo mismo** (v. también Dictámenes 35:68; 90:228; 118:333), **cabe razonablemente considerar que cuando determinados entes se subrogan a la actividad esta-**

tal participando en la realización de fines que el Estado ha asumido a través de la ley como propios de su actividad subsidiaria (en el caso, educación, asistencia social y salud pública), esos entes deben ser tratados como que actúan en lugar o junto al Estado y no como meros particulares.

Lo expuesto dota de fundamento axiológico suficiente a las exenciones de gravámenes cuya causa sea la capacidad contributiva, como acontece en los impuestos; pero ese fundamento no se verifica cuando se trata de gravámenes cuya causa jurídica responde a otra circunstancia, como es el caso de las tasas, las contribuciones y los derechos de aduana.

Es que en estos gravámenes, la capacidad contributiva, aún cuando puede estar presente, no cumple la función de causa jurídica del gravamen (v. Francisco Martínez, *El criterio económico y la importancia que para el derecho fiscal tiene la divergencia en el negocio jurídico entre la intención empírica (intentio facti) y la intención jurídica (intentio iuris)*, Derecho Fiscal, T. XX, ps. 849 y ss., en esp. pág. 859).

4. Por último, teniendo en cuenta el marcado carácter opinable que reviste la cuestión vinculada con la vigencia de la exención contemplada por el referido artículo 3°, apartado 1°, inciso d), de la Ley N° 16.656, que ha generado el dictado de actos que involucran criterios contrapuestos (v. Instrucción General DGI N° 28/95 e Instrucción AFIP N° 5/00; v. también Resolución R.N. N° 210/02, que luce a fojas 134, y Aviso DE TEIM N° 10703 (fs. 144), cabe recordar que este Organismo en Dictámenes 240:354 estimó conveniente que se propiciara ante el Poder Legislativo Nacional



4 5 2

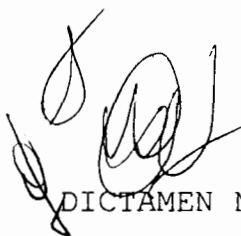
Procuración del Tesoro de la Nación

el dictado de una norma que recepte el criterio definitivo que el Órgano Recaudador -o el que ejerce su control de legalidad-, hayan adoptado sobre el tema (v. Acápite V, ap. 2.), opinión que se reitera en este asesoramiento.

- IV -
CONCLUSIÓN

De conformidad con las consideraciones que preceden, este Organismo estima que no corresponde hacer lugar al reclamo de repetición de que tratan estos actuados.

Así opino.


DICTAMEN N° 576 1


HORACIO DANIEL ROSATTI
PROCURADOR DEL TESORO DE LA NACION